

El Salvador: El miedo y la dictadura se instalaron en un año

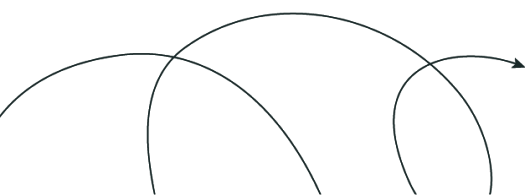
De cara a la compleja coyuntura que viven algunos países de Centroamérica y México, Linterna Verde contribuirá con informes de “aterriaje país” en los que se van a describir las mayores amenazas y oportunidades para los espacios cívicos de 7 países de la región. Además, se producirá un boletín mensual de investigación digital que busca ofrecer una mirada al bosque de la conversación digital en la región y la posibilidad de responder a preguntas sobre árboles específicos que sean estratégicos para el trabajo de las organizaciones.

El tercer informe es el de El Salvador. Está dividido en tres secciones: Contexto, la guerra contra el Espacio Cívico e ideas para el futuro próximo, que incluye propuestas para coordinación entre actores civiles salvadoreños e instituciones aliadas a nivel internacional.

Para este reporte, Linterna Verde realizó entrevistas con 13 actores políticos y de la sociedad civil salvadoreña, además de lecturas de investigaciones periodísticas e informes institucionales. Las entrevistas, para enriquecer la profundidad del análisis, se hicieron de manera anónima con activistas, periodistas, economistas, empresarios y académicos. En aras de guardar su identidad para evitar reacciones represivas, sólo se acreditará la profesión de la persona en cada frase citada. Las entrevistas se realizaron entre el 10 de marzo y el 8 de abril de 2022.

1. Contexto

La débil democracia post-guerra no logró institucionalizar una sociedad de bienestar ni tampoco el espacio cívico. Los gobiernos de ARENA (1988-2008, empresariales y



pro-militares) y del FMLN (2008-2018, de la antigua guerrilla de izquierda) construyeron un sistema político en el que continuaron los escuadrones de la muerte dentro de la Policía, se eliminaron los derechos humanos para jóvenes que conforman las pandillas, o se criminalizaron los derechos reproductivos de las mujeres al extremo de encarcelar incluso a quienes sufrieran pérdidas o abortos espontáneos. Activistas de derechos humanos eran hostigados, y si bien había ciertas condiciones para la libertad de prensa y de expresión, directores de medios tuvieron que recurrir a carros blindados para evitar atentados.

Con el presidente Nayib Bukele en 2022, la situación del espacio cívico salvadoreño es peor. El pronóstico es grave porque Bukele tiene un respaldo popular arriba del 90 por ciento, y las personas entrevistadas coinciden en que El Salvador se encuentra en el inicio de su régimen.

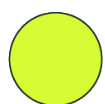
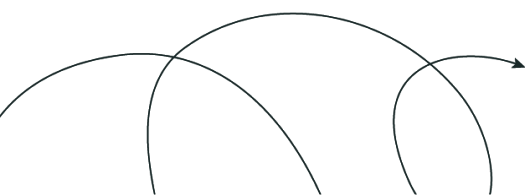
La evolución (y el control autoritario) a la velocidad de la luz

“Estamos en un escenario que pasó de la bipolaridad política de derecha e izquierda, a una bipolaridad más complicada, de Bukele y anti-Bukele. Y esta tensión va en expansión porque Bukele quiere apropiarse de todos los espacios políticos, incluido el espacio cívico”, explica a Linterna Verde un periodista salvadoreño desde el exilio en Estados Unidos.

El problema para quienes habitan el espacio cívico salvadoreño –organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que disienten– es el antecedente del resto de espacios políticos a los que se hace mención; Bukele los ha tomado uno por uno. “A la oposición política, de ARENA y FMLN, el presidente los aniquiló. Por la vía electoral o por la vía penal, con casos reales o inventados”, añade el periodista.

El origen de Bukele está en la vía democrática, electoral. Ganó la presidencia en junio de 2019 con mayoría en primera vuelta (más del 50% de los votos). Dos años después se enfrentó a las elecciones legislativas, pero a pesar de tener que enfrentar la pandemia del covid-19, su popularidad aumentó. ¿Qué pudo hacer esto posible? Aquí, dos elementos:

- Treinta años de gobiernos ARENA-FMLN dejaron como saldo pobreza (crecimientos de 1% anual sin redistribución de la riqueza) y tasas de violencia que ubicaban a El Salvador en los diez países más inseguros del mundo, llegando a un récord de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2015.



- Tres años de Bukele alcanzaron la tasa de homicidios más baja en democracia (20 por cada cien mil habitantes¹). Además, tuvo una excelente campaña de vacunación (70% de vacunación, casi el doble que Guatemala) y asistencia financiera a las familias (US\$300), aumentó el salario mínimo un 20%, y tiene una capacidad sin precedentes para la comunicación política.

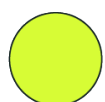
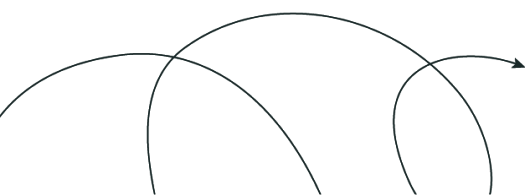
Bukele logró traducir esa popularidad en una victoria aplastante en las elecciones legislativas, obteniendo más de dos terceras partes de la Asamblea. Aquí hubo un punto de quiebre, en 2021.

En 2019 era un candidato que usaba investigaciones periodísticas para sustentar sus críticas a las políticas de ARENA y el FMLN, era un candidato que prometió un ente internacional de la ONU para luchar contra la corrupción, era un candidato que usaba fuentes independientes para reafirmar la necesidad de políticas progresistas en materia económica y fiscal. Hubo un quiebre al obtener el control absoluto de la Asamblea.

A mediados de 2021, la nueva asamblea bukelistas destituyó al Fiscal General, destituyó a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y acabó con la CICIES (la misión anti-corrupción de la ONU). Forzó la jubilación de casi 200 jueces mayores de 60 años. La revisión anual de Derechos Humanos de la Unión Europea resumió el cierre del círculo autoritario: “La nueva sala de lo constitucional pavimentó el camino para que el Presidente pueda reelegirse a pesar de la prohibición explícita en la Constitución. Esta concentración de poder se lleva a cabo mientras el vicepresidente prepara el borrador de una nueva Constitución”.

Ahora que Bukele tiene el [control total del Estado](#), ¿cuál es su proyecto político? Todavía no está claro. En sus discursos públicos y su canal preferido de comunicación (Twitter), delinea que quiere construir “un país del futuro” y ofrece construir “[a freedom haven](#)” (un paraíso de libertad) para las criptomonedas. Lo que está claro hasta ahora es que para Bukele el control del Estado no es suficiente y en 2022 se ha planteado controlar también el espacio cívico.

¹ La tasa de homicidios promedio del mundo está alrededor de 6 asesinatos por cada 100 mil; África tiene 13 y América Latina, 17, según UNDOC. El Salvador la redujo de 103 a 20 por cada 100 mil en menos de una década.)



2. La guerra de Bukele contra el espacio cívico

Hay dos diferencias importantes entre las ofensivas autoritarias contra el espacio cívico en dos regímenes centroamericanos, El Salvador y Nicaragua.

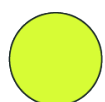
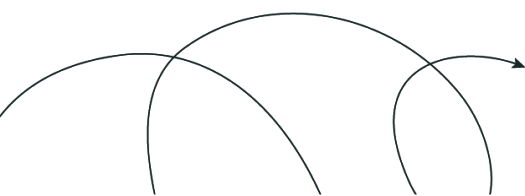
En Nicaragua, desde 2018 ha habido manifestaciones que fueron reprimidas con [francotiradores](#), 175 presos políticos que pueden estar siendo torturados, centenares de exiliados en Costa Rica y ninguna posibilidad de hacer manifestaciones o activismo desde organizaciones legales en Nicaragua. El Salvador no está en una situación de esa gravedad. No obstante, hay un punto de preocupación: Así como el régimen de Ortega en Nicaragua tuvo un punto de quiebre hacia el autoritarismo en 2018, a partir de una crisis económica tras el colapso de Venezuela y los subsidios hacia Nicaragua, el régimen de Bukele en El Salvador también tuvo un quiebre hacia el autoritarismo y la guerra contra el espacio cívico en 2021 y 2022, cuando tomó el control total de la Asamblea Legislativa, a pesar de estar en un momento de recuperación económica y con niveles de popularidad de 90%.

“Bukele reprime porque es un [narcisista](#) que no quiere que lo cuestione nadie, porque no ‘necesita’ reprimir para mantener el poder. Ni siquiera para mantener la popularidad, porque periodistas y activistas nunca hemos sido tan irrelevantes para la ciudadanía”, dijo una activista para este informe.

Un economista salvadoreño continuó con esta reflexión: “Bukele basa su discurso en el odio a enemigos políticos a los que responsabiliza de todos los males. Que si ARENA y el FMLN, que si los pandilleros, que si Estados Unidos de Biden, que si las oenegés y la prensa. ¿Qué va a pasar cuando se le acaben los demonios para culparlos por todos los males del país? Pues será un gobierno más represivo”.

Actores del espacio cívico: pequeños pasos hacia delante y la represión política

Un primer actor mencionado por los entrevistados, por su rol histórico de resistencia cívica en El Salvador, es la Iglesia católica. Es una institución importante por las constantes referencias “a Dios” por parte de Bukele, y su utilización de símbolos como la figura en uno de los salones principales de conferencias en Casa Presidencial de un cuadro de san Óscar Romero, el obispo que fue uno de los mártires de la dictadura salvadoreña.



La iglesia católica, coinciden un periodista y un diplomático entrevistados, está dividida. Por una parte está el Arzobispado, más cercano a Bukele, y por otra parte está el cardenal Gregorio Rosa, que ha sido más crítico del hostigamiento contra actores de la sociedad civil. A la 'oposición cívica' a Bukele se suma la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA, jesuita) y su Instituto de Derechos Humanos.

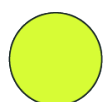
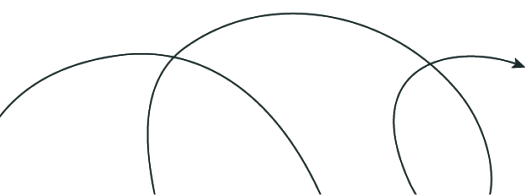
Otros actores son los movimientos de Derechos Humanos, en especial quienes trabajan en justicia transicional y los movimientos feministas.

Desde organizaciones dedicadas a la justicia transicional se describe un quiebre en 2021. "Durante los primeros años (de Bukele), sentíamos avances, sentíamos que los jueces estaban más animados para avanzar en la justicia transicional, y en la justicia en general. Pero hay un quiebre que empieza cuando Bukele toma la Asamblea Legislativa con los militares en febrero (de 2021) y cuando gana la mayoría en la Asamblea y quita tanto a la Corte Suprema, como a casi 200 jueces, entre los que estaba el que llevaba el caso de la masacre de El Mozote", reflexiona una activista.

La masacre de El Mozote (diciembre 1981) fue la más grande de la historia moderna salvadoreña, con 978 víctimas registradas. Si bien al inicio del gobierno de Bukele hubo medidas simbólicas, como cambiar el nombre de una base militar que honraba a uno de los generales acusados de ser responsables de la masacre, en abril de 2022, el juez Jorge Guzmán, quien estuvo a cargo del caso hasta que fue obligado a jubilarse. El ahora exjuez es crítico del gobierno de Bukele y este mes [denunció hostigamiento por desconocidos afuera de su casa](#).

En otro de los casos insignia de la justicia transicional, el del asesinato de 6 jesuitas de la UCA en 1989 por parte del Ejército, hay también avances y retrocesos. Se ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani (ARENA), [pero se dio 'casa por cárcel' a los generales que estaban al mando del Ejército cuando ocurrió el asesinato](#). "En el caso de los jesuitas, parece que solo se perseguirá a Cristiani por ser de ARENA, pero no a los responsables militares", protestó un activista entrevistado.

Para el movimiento de derechos humanos, es una situación que afecta al espacio cívico. "Durante los tiempos de ARENA (1988-2008), cuando tenían el control total del Estado, la situación era bien difícil, pero los gobiernos empresariales (de ARENA) cuidaban más las formas y buscaban ser admitidos dentro del grupo de los países



comprometidos con el respeto a los derechos humanos”, dice otro activista entrevistado.

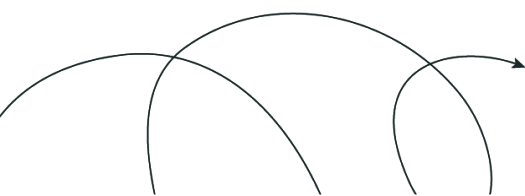
Durante los tiempos del FMLN (2008-2018), “había más contrapesos, pero porque el sector empresarial, conservador, mantuvo el control sobre Cortes, entonces había un gobierno y una asamblea legislativa de izquierda y unas cortes de derecha, y se hacían contrapesos que favorecían el espacio cívico. Y pues algunas veces se ganaba en la Corte y otras se perdía”, añade un periodista, “el problema ahora es que Bukele tiene todo el poder, y no le importa el tema de derechos humanos ante la comunidad internacional”.

Para el **movimiento feminista**, también hay algunos avances pero también son objeto de la criminalización política por parte de Bukele. Entre los avances está la excarcelación de cinco mujeres condenadas por emergencias obstétricas, pero otras siete permanecen en prisión y otras cinco están todavía bajo juicio, recoge el [informe](#) de la Unión Europea. No obstante, la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos todavía es de nichos en redes sociales y el gran actor que marca la agenda, Bukele, todavía no se ha posicionado con firmeza para promover una agenda reformista, pero tampoco un recrudecimiento de la represión contra organizaciones feministas. Quienes [sí atacan a oenegés](#) que promueven los derechos sexuales y reproductivos son las organizaciones denominadas pro-vida.

Así también, se dio una sorpresiva orden a favor de los derechos de las personas trans por parte de la Sala Constitucional impuesta por Bukele: El 22 de febrero 2022, la Sala ordenó a la Asamblea reformar la Ley de Nombre para que las personas trans puedan cambiarse el nombre de acuerdo a su identidad de género.

Hasta ahí llegan los avances. En contraste, se eliminó del borrador de reforma constitucional la despenalización del aborto, y como salieron a manifestar contra la violencia machista, las feministas también fueron incluidas en el catálogo de enemigas públicas de Bukele, [recuerda la periodista María Luz Nóchez](#). “Ellas (las feministas) no defienden a las mujeres, defienden al FMLN, si no estuvieran contentas de que se han reducido los feminicidios”, tuiteó Bukele el 4 de junio de 2020. La histórica oenegé feminista Las Méridas ha sido ya acusada por el Gobierno de ser “una oenegé de fachada” y se le sigue un proceso administrativo en tribunales, mientras los [crímenes](#) contra mujeres continúan.

En el pasado, las **organizaciones ambientales** habían sufrido ataques (asesinatos incluidos) por su oposición a la minería, en especial por parte de fuerzas paramilitares



relacionadas con las corporaciones. La prohibición legislativa total de la minería en 2018 colocó a El Salvador en la vanguardia en este tema ambiental. Pero en 2022 Bukele ya anunció un congreso sobre “minería y desarrollo sostenible” y su asamblea legislativa creó una oficina gubernamental para facilitar la investigación de potenciales fuentes mineras.

Las **Instituciones técnicas cívicas** también han sufrido hostigamientos. La directora de Fusades, Claudia Umaña, presentó su renuncia de [manera sorpresiva](#) en febrero de 2022. Dos dirigentes empresariales consultados que pidieron el anonimato dijeron que se debió a las presiones gubernamentales no solo en su contra sino de su familia y socios corporativos. Uno de los empresarios consultados explicó el sentimiento dentro del sector: “Al inicio del gobierno de Bukele había más apertura a escucharnos, pero hubo un punto de quiebre y rompió con todos los sectores. Ahora uno como empresario no puede poner un tuit crítico porque enseguida te caen auditorías de hacienda, o de trabajo, o de salud, o de lo que sea. Hay mucho miedo”.

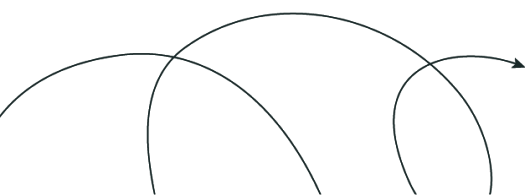
Días después de que presentara un [análisis técnico](#) sobre la legalización del Bitcoin, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) informó al público que su sitio web estaba enfrentando problemas técnicos.

La economista Tatiana Marroquín, crítica del experimento de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal, compartió con [el programa radial El Hilo](#) que ella estaba entre las personas a quienes el gobierno le instaló el malware de espionaje Pegasus².

Otro actor dentro del espacio cívico es el periodismo y los medios independientes, que ha resistido tanto desde medios conservadores como La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy, o como medios más progresistas como El Faro, para quienes la represión política ha sido profunda.

A El Faro y sus periodistas, Bukele empezó a hostigarlos por medio de auditorías fiscales, acusándolos de lavado de dinero de fundaciones internacionales. Como parte de su estrategia está la de amenazar a medios y a oenegés con una [iniciativa de ley](#) para imponer un impuesto de 40% para todo el financiamiento internacional sin ánimo de lucro. La iniciativa finalmente no se aprobó, pero sirvió para que [Bukele se mofara de los funcionarios de Open Society Foundations](#), principal fuente de financiamiento del medio El Faro. La fijación del presidente autoritario y sus [trols](#) en Twitter contra El

² Malware israelí que tiene la capacidad de sustraer toda la información de los teléfonos interceptados.



Faro se debe a su credibilidad internacional y porque algunos [reportajes periodísticos](#) han servido como sustento para que Estados Unidos sancione por corrupción a integrantes del gabinete de Bukele.

El Gobierno ha ido aumentando el tono contra El Faro. En 2020 le inventó un caso de acoso y abuso sexual [a uno de sus periodistas](#). Además, entre 2021 y 2022, El Faro pudo demostrar que las comunicaciones de [22 de sus integrantes fueron intervenidas por Pegasus](#).

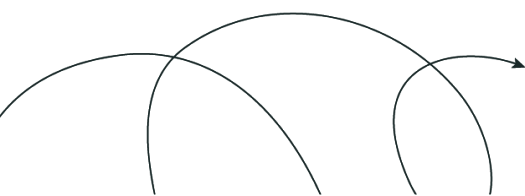
El hostigamiento de los seguidores y funcionarios de Bukele contra periodistas mujeres es abrumador. Tras una entrevista realizada le escribieron [a la periodista](#): “Ojalá las violen a vos y a tu mamá”, y otra [denunció](#) que “Sacaron fotos más de contexto donde dicen ‘se ofrece sexo gratis’”. Contra una fotoperiodista la agresión llegó a ser física [por parte de un guardaespaldas de Bukele](#): “Si hubiera estado mal parada me avienta, fue un golpe fuerte con los puños”.

El Faro ha sido el medio investigativo de referencia en El Salvador durante sus 24 años de existencia. Fueron quienes destaparon las negociaciones secretas para una ‘tregua’ con las pandillas durante el gobierno del FMLN, [que lograron que los asesinatos se redujeran de manera drástica en 2012](#). Y a pesar de la propaganda de Bukele por la reducción de homicidios entre 2019 y 2022, El Faro publicó que también se debía a una negociación entre el Gobierno y las pandillas a cambio de no extraditar a los [líderes pandilleros](#) a Estados Unidos.

Cuando a finales de marzo de 2022 esa nueva ‘tregua’ se rompió y los homicidios estallaron hasta 87 muertos en 72 horas, Óscar Martínez, [jefe de redacción de El Faro](#), recordó que no es el plan gubernamental Bukele lo que determina si hay asesinatos en El Salvador, sino que es algo que deciden los líderes de las pandillas.

Esta ‘explosión’ de homicidios no provocó una admisión de culpa o reconocimiento del fracaso del modelo de las negociaciones con pandillas, sino que Bukele volvió a inaugurar la #GuerraContraPandillas con un aumento en la persecución contra “los terroristas” y cualquiera que lo cuestione, empezando por periodistas y activistas de derechos humanos.

En su traducción legal, El Salvador se encuentra en un ‘Régimen de Excepción’ que incluye la prisión por 30 años para cualquiera acusado de ser parte de las pandillas



(incluidos niños desde los 12 años), así como prisión por 15 años para quien la Fiscalía considere que es “cómplice de las pandillas y transmita sus mensajes”.

Un tuit del jefe de Estado Nayib Bukele bastó para convertir a un antropólogo con 20 años de experiencia estudiando pandillas en “una basura” cómplice de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. El antropólogo Juan Martínez publicó su caso en el [Washington Post](#) desde el exilio.

La orden de ‘encarcelar a todos los pandilleros’ ha criminalizado a jóvenes en situación de pobreza; van 17,000 capturas en 30 días. La [Prensa Gráfica](#) documentó ya los primeros cuatro asesinatos en prisiones, de jóvenes encarcelados que no pertenecían a las pandillas. Se trata de un músico, un motorista, un comerciante y un desempleado.

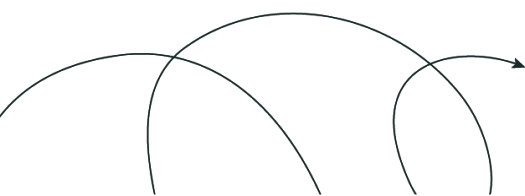
3. Ideas para el futuro próximo

¿Cómo resistir a la represión contra el espacio cívico en El Salvador? Cuatro de las personas entrevistadas para este informe –activistas, periodistas y economistas– coinciden en que solo podrá disuadirse a Bukele de la senda autoritaria con presiones internacionales. Esto debido a que en El Salvador, Bukele ya no tiene contrapesos institucionales, políticos ni sociales con suficiente fuerza para detenerlo.

En política exterior, Bukele se presenta como un crítico del sistema internacional de derechos humanos o del sistema financiero internacional, pero no es un aislacionista. Invierte de manera permanente en sus alianzas en Estados Unidos, Turquía o China.

En el tema de derechos humanos, con sus [críticas](#) al presidente estadounidense Joe Biden, así como con su voto de abstención a la condena de la ONU a la guerra de Rusia contra Ucrania, Bukele se ha posicionado como un aliado de la extrema derecha de Estados Unidos, siendo citado por [Donald Trump Jr](#) o cubierto por el sitio radical [Breitbart](#). Al mismo tiempo, su iconoclasia respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI) por incluir al Bitcoin como moneda de curso legal le ganó [aplausos](#) del ciberactivista Edward Snowden.

El Salvador tiene una deuda que representa el 87% del PIB, y está negociando con el FMI un crédito de US\$1,400 millones. “Es su único talón de aquiles”, coinciden varias personas entrevistadas, “y Estados Unidos puede presionar a Bukele desde ahí”.



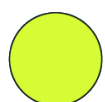
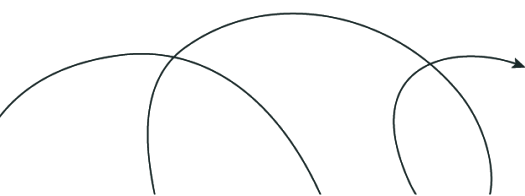
Un economista consultado coincide en el ‘talón de aquiles’ y recuerda que Bukele ha amenazado con nacionalizar el sistema de pensiones, que en El Salvador fue privatizado, como en Chile: “En Chile también se discute nacionalizar las pensiones, pero la diferencia es que en Chile hay instituciones que son contrapesos que fiscalizarán cómo se utilizarán esos posibles nuevos fondos públicos. En El Salvador de Bukele, no queda ningún contrapeso estatal y se criminaliza a los fiscalizadores de la sociedad civil, por lo que una nacionalización salvadoreña en este momento solo terminaría en una piñata de gastos populistas”.

Dos personas activistas sociales entrevistadas sugieren mantener la presión internacional, tanto desde el ámbito financiero, como desde los derechos humanos:

- Registrar, documentar y revisar lo que está ocurriendo en el régimen de Bukele y en su experimento con criptomonedas.
- Aumentar la interlocución con instancias internacionales, tanto públicas de los gobiernos o la ONU, como con instancias privadas, de fundaciones:
 - a. Fortalecer administrativa, financiera y anímicamente a las organizaciones de la sociedad civil, medios incluidos.
 - b. Activar mecanismos internacionales para vigilancia de violaciones a los derechos humanos.

El mayor problema para las organizaciones sociales es la ausencia de una narrativa que pueda competir con la de Bukele.

Un ejemplo es la política represiva contra las pandillas. Investigaciones periodísticas demostraron que la reducción de homicidios tan drástica se debe a negociaciones con las pandillas, negociación que pueden descarrilarse como en marzo de 2022, cuando hubo 87 muertos en tres días. Además, estudios demuestran que la encarcelación masiva no rehabilita a los pandilleros, sino que las prisiones son [potenciadores de mayor criminalidad](#). “Pero Bukele utiliza un sentimiento de hartazgo y ganas de venganza de la gente, y presenta un mensaje que parece verdadero: ‘Con mi régimen de excepción en abril, los homicidios se redujeron a días con un o ningún homicidio’”, refiere una activista, que vaticina 10 años de Bukele en el poder.



Uno de los empresarios entrevistados puede ayudar a comprender el peso de Bukele sobre el imaginario de la mayoría de los salvadoreños, de ese 90% que aprueba su administración:

“Hay mucho miedo de criticar cualquier cosa que haga el Gobierno”, dijo al inicio de la entrevista con Linterna Verde. Y veinte minutos después se le preguntó: –¿Hay algún otro elemento que le gustaría agregar antes de cerrar la entrevista?–. Esta fue su respuesta: –“Que todos los gobiernos anteriores han dicho que van a resolver el tema de las pandillas, que nos hacen tanto daño a los salvadoreños; perdí la cuenta de cuánto hemos perdido en la empresa por las extorsiones o en el pago de seguridad. Bukele tiene una popularidad tan alta porque él sí les está entrando duro a las pandillas, de lleno. Bueno, si Bukele logra erradicar a las pandillas de verdad, creo que ahí sí votaría yo para otro gobierno suyo”–.

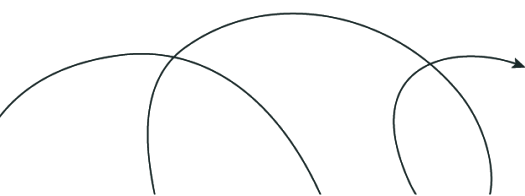
Esperanza de un efecto internacional

No obstante este panorama, desde la última semana podría estar teniendo éxito la apuesta de varios de los entrevistados por Linterna Verde, sobre el talón de aquiles de Bukele con el tema del financiamiento internacional, el bitcoin y el riesgo de un default para El Salvador.

La revista económica de El País, 5 Días, recuerda que los precios de la deuda soberana de El Salvador [colapsaron en abril en un 15.1%](#) hasta mínimos históricos, solo superados por la caída de la deuda de Ucrania, que sufre una invasión de Rusia. 5 Días explica que son tres los motivos de esta caída en la reputación financiera de El Salvador:

- a) El fracaso de Bukele para posicionar en el mercado bonos en bitcoin por US\$1 mil millones.
- b) El estancamiento de las negociaciones con el FMI, que puede impedir que El Salvador cumpla con el pago de US\$800 millones que vencen en enero 2023.
- c) El escepticismo de los ciudadanos salvadoreños sobre el uso del bitcoin. Un estudio reveló que solo el [20% de los que bajaron la app-billetera](#) del gobierno continuaron usándola después de utilizar los US\$30 que recibieron como regalo.

A esto se suma **un punto muy importante para el espacio cívico en El Salvador**: el rumbo dictatorial y la ruptura de los contrapesos institucionales son poco atractivos para el mercado financiero. Fitch & Ratings, la calificadora de riesgo, lo puso en las [siguientes palabras](#):



En opinión de Fitch, “el debilitamiento de las instituciones y la concentración de poder en la Presidencia han aumentado la imprevisibilidad de las políticas, y la adopción del bitcoin como moneda de curso legal ha agregado incertidumbre sobre el potencial de un programa del FMI que desbloquearía la financiación para 2022-2023”.

Centroamérica, 10 de mayo de 2022.

